



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 36047/2019/CA1

Córdoba, 8 de marzo de 2022.-

**Y VISTOS:**

Estos autos caratulados **"DENUNCIADO: EULA, Orlando José S/ Evasión Simple Tributaria - Denunciante AFIP-DGI"** (Expte. FCB 36047/2019/CA1) venidos a conocimiento de la Sala A de este Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido con fecha 1 de septiembre de 2020 por la Fiscal Federal de Villa María, en contra de la resolución dictada con fecha 27 de agosto de 2020 por el Juez Federal de Villa María, en cuanto dispuso: **"I.- SUSPENDER** el trámite de las presentes actuaciones, hasta la cancelación total de la deuda que el contribuyente Orlando José EULA, CUIT 23-06603800-9, mantiene con el organismo de aplicación por el Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2017, o hipotéticamente hasta que deje de cumplir con las condiciones estipuladas en su plan..."

**Y CONSIDERANDO:**

**I.-** Los presentes autos llegan a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto con fecha 1 de septiembre de 2020 por la Fiscal Federal (fs. 65/66vta.) en contra de la resolución dictada por el Juez Federal de Villa María con fecha 27 de agosto de 2020 cuya parte resolutive fuera precedentemente transcripta (fs. 62/64vta.).

**II.-** Mediante la resolución citada, el Juez Federal resolvió suspender el trámite de las presentes actuaciones hasta la cancelación total de la deuda que el contribuyente Orlando José Eula mantiene con el Organismo de aplicación o, hipotéticamente, hasta que deje de cumplir con las condiciones estipuladas en el plan de pagos oportunamente suscripto.

Para resolver en tal sentido, el Instructor ~~reseñó el origen de las presentes actuaciones, los~~

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747

extremos que se desprenden de la denuncia formulada primigeniamente por la AFIP-DGI, el contenido de la promoción de acción penal, las circunstancias expuestas en la solicitud de procesamiento deducida con fecha 12 de febrero de 2020 por la Fiscal Federal y los diversos elementos probatorios incorporados a los presentes.

A dichas particularidades, el Juez Federal agregó que conforme se desprende de la denuncia y de la documentación presentada oportunamente por la AFIP, el contribuyente suscribió con fecha 3 de noviembre de 2019 el Plan de Pago N° L488874 con el fin de regularizar la totalidad de la pretensión fiscal, plan que, a la fecha de dicha resolución, se encontraba vigente.

En este sentido, habiendo suscripto el encartado el plan de pago de mención con anterioridad al acto procesal mediante el cual tomo conocimiento de la imputación, entendió que resulta aplicable el art. 16 del nuevo Régimen Penal Tributario estatuido por la Ley 27.430 y lo sostenido por el Procurador General de la Nación al dictaminar en el caso "BAKCHELLIAN, Fabián y Otros" - supuesto análogo al presente y que logró acogida favorable ante la Corte Suprema de la Nación-, motivo por el cual, a su criterio, corresponde suspender el trámite de las presentes actuaciones.

**III.-** Frente a dicha resolución, con fecha 1 de septiembre de 2020, la Fiscal Federal de Villa María interpuso en tiempo y forma recurso de apelación (ver fs. 65/66vta. y constancias digitales obrantes en el Sistema de Gestión Judicial Lex-100).

En dicha oportunidad, la recurrente desatacó que para resultar procedentes las previsiones del artículo 16 de la Ley 27.430, los montos adeudados deben ser abonados en forma íntegra e incondicional dentro del plazo de 30

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 36047/2019/CA1

días posteriores al acto procesal en el cual se notifique fehacientemente la imputación penal, sin desprenderse o inferirse de la redacción normativa la posibilidad de un cumplimiento en cuotas.

En el punto, agregó que la Ley 27.430 no admite expresa o implícitamente la posibilidad de extinguir la acción penal por medio de un régimen de facilidad de pagos y que en los supuestos en los cuales el legislador ha pretendido brindarle al contribuyente dicha posibilidad, tal como se infiere del título II de la Ley 27.260, lo ha previsto expresamente.

Por su parte, enfatizó que el dictamen en los autos "BAKCHELLIAN" que el Instructor arguye, no resulta análogo al presente supuesto toda vez que dicho precedente referencia al art. 73 de la Ley 25.401 y que un criterio contrario al pretendido implicaría la posibilidad de promover comportamientos especulativos a costa de las arcas del Estado.

**IV.-** Radicados los autos ante esta Alzada, el Fiscal General mantuvo el recurso de apelación oportunamente interpuesto con fecha 21 de octubre de 2020 y presentó el informe previsto en el art. 454 del CPPN con fecha 28 de octubre de 2020, oportunidad en la cual reprodujo, en líneas generales, los agravios y consideraciones expuestas en primera instancia -ver fs. 75 y 76/77vta., respectivamente, y constancias digitales obrantes en el Sistema de Gestión Judicial Lex-100-.

**V.-** Por su parte, con fecha 5 de noviembre de 2020, el doctor Rodolfo Daniel Galli contesto los agravios deducidos por el recurrente de conformidad a lo prescripto por el art. 454 del CPPN (ver fs. 78/82vta y constancias digitales obrantes en el Sistema de Gestión Judicial Lex-

100).

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747

En dicha oportunidad, la defensa destacó que en la propia denuncia efectuada por la AFIP, el Organismo recaudador reconoce que el responsable ha regularizado el monto ajustado en concepto de impuesto a las Ganancias mediante el acogimiento a un plan de pagos casi seis meses antes y el cual se encuentra siendo abonado en tiempo y forma, cumplimentándose así de manera efectiva los requisitos establecidos en el art. 16 de la Ley 27.430.

En este sentido, enfatizó que la sola circunstancia de haberse acogido al plan de pagos implica, per se, un liso y llano reconocimiento la deuda y que, el solo extremo de efectuarse el mismo mediante un plan de facilidades, no implica desconocer su carácter incondicional y total.

Dicho ello, agregó que el plan de pagos en cuestión se compone de capital e intereses, fijados de manera unilateral por el Organismo recaudador, no resultando así atendibles los agravios expuestos en torno a la existencia de algún perjuicio económico hacia el fisco y a la presunta actitud especulativa del contribuyente.

Por su parte, enfatizó que el dictamen del fallo "BAKCHELLIAN" resulta efectivamente aplicable toda vez, al igual que en el presente supuesto, versa sobre la regularización de obligaciones tributarias.

Finalmente, señaló que pretender, tal como lo arguye el recurrente, que sólo la cancelación total del monto objeto de la pretensión fiscal en un pago resulte el único medio válido para la extinción de la acción penal, implica favorecer, en forma exclusiva a los contribuyentes, que se encuentren en mejor situación económica y financiera, hecho que constituye un trato desigual ante la ley y por lo tanto inconstitucional.

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 36047/2019/CA1

**VI.-** Sentadas y reseñadas en los precedentes párrafos las posturas asumidas, corresponde introducirse propiamente en el tratamiento de la apelación deducida. A tal efecto, se sigue el orden de votación establecido a fs. 84 de autos, según el cual corresponde expedirse en primer lugar la doctora Graciela S. Montesi, en segundo lugar, al doctor Eduardo Ávalos y, en tercer lugar, al doctor Ignacio María Vélez Funes.

**La señora Juez de Cámara, doctora Graciela S. Montesi, dijo:**

**I.-** Avocada al estudio de la presente causa, examinadas las constancias obrantes en autos, las razones dadas por el Juez Instructor en su resolución, por el recurrente y por la defensa de los encartados, el interrogante del presente radica en determinar, sobre la base de los diversos elementos incorporados a los presentes, si el auto interlocutorio dispuesto por el Juez Federal de Villa María resulta ajustado a derecho.

A tales fines, advierto oportuno efectuar una breve reseña de las diversas constancias procesales obrantes en los presentes. Estos actuados encuentran origen con motivo de la denuncia formulada el día 29 de agosto de 2019 por la AFIP-DGI en contra del contribuyente **Orlando José Eula** -CUIT N° 23-06603800-9-, accionar que fuera posteriormente encuadrado por el Fiscal Federal de Villa María en la promoción de acción penal de fecha 18 de septiembre de 2019 como "evasión simple tributaria", en calidad de autor (ver denuncia obrante a fs. 2/10vta y requerimiento de instrucción obrante a fs. 13/14).

Repárese que, conforme surge de dichas piezas procesales, con fecha **11 de marzo de 2019**, el contribuyente Orlando Eula suscribió un plan de pagos N° **L488874** con el fin de cancelar la deuda objeto de la

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747

pretensión fiscal, plan de facilidades que, a la fecha de la resolución impugnada, se encontraba aún vigente, circunstancia que fue ponderada por el Juez Instructor.

Finalmente, resta agregar que conforme se desprende de la presentación efectuada ante esta Alzada por el doctor Rodolfo Daniel Galli, el plan de pagos suscripto por el encartado habría sido cancelado en su totalidad con fecha 16 de marzo de 2021 (ver presentación obrante a fs. 85/87 del presente incidente).

**II.-** Así las cosas, atento a las consideraciones expuestas por el Juez Instructor, en virtud de la existencia de un plan de facilidades suscripto por el encartado Orlando José Eula con fecha **11 de marzo de 2019**, esto es, con anterioridad al acto en el cual el encartado ha tomado conocimiento de la imputación penal que pesa en su contra, estimo necesario efectuar una serie de consideraciones en torno a la aplicación del art. 16 de la Ley 27.430 y los eventuales efectos que la suscripción de un plan de pagos puede generar dentro del marco de un proceso penal.

En lo que a ello se refiere, el art. 16 de la Ley 27.430 concretamente establece: *"En los casos previstos en los artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 6° la acción penal se extinguirá, si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios, hasta los treinta (30) días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula. ... Este beneficio de extinción se otorgará por única vez por cada persona humana o jurídica obligada"* (el resaltado me pertenece).

Dicho ello, se advierte que el art. 16 de la ley ~~27.430~~, para que proceda su aplicación, impone la





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 36047/2019/CA1

condición de que las obligaciones evadidas se acepten y cancelen de forma total en el plazo perentorio de 30 días hábiles posteriores a la declaración indagatoria, circunstancia que, tal como fuera expuesta, no ha acaecido en el presente supuesto.

Ahora bien, sin perjuicio de ello, entiendo que a la luz de las circunstancias del caso la solución propiciada oportunamente por el Juez Federal en lo concerniente a la suspensión del proceso penal resulta correcta y ajustada a derecho.

En efecto, las constancias procesales recolectadas en estos actuados dan cuenta de la existencia de un plan de pagos vigente a la fecha del auto impugnado, circunstancia que implica un plazo otorgado por el Organismo recaudador con el fin de que el contribuyente regularice su situación tributaria. Dicho hecho habría acontecido además con anterioridad a la denuncia oportunamente efectuada por la AFIP, con lo cual la suspensión de la persecución penal hasta su cabal cumplimiento o el hipotético incumplimiento de las condiciones estipuladas resultó, en ese entonces, una solución acorde a derecho.

Entiendo que no es ajustado a derecho proseguir la causa penal en contra del encartado cuando el mismo se ha adherido a un plan de pagos, toda vez que al otorgársele un plazo durante el cual el imputado puede regularizar su situación, se debe suspender la persecución penal hasta su cumplimiento total o reanudar la causa en caso de incumplimiento del plan suscripto.

Cabe remarcar en este sentido la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en autos "Bakchellian" (CSJN, 28.09.2004), en cuanto a que si se dispone un régimen de facilidades de pago, al que ha

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747

adherido el imputado, "no parece lógico que el proceso penal pueda proseguir hasta el dictado de una sentencia definitiva, eventualmente condenatoria, mientras el contribuyente se halla cumpliendo con la cancelación de las cuotas del plan de pago previamente acordado."

Ahora bien, sin perjuicio de los lineamientos expuestos y la solución procesal propiciada en los párrafos que anteceden, no puede dejar de señalarse que en la presente oportunidad obran en estos actuados extremos novedosos y disimiles a los ponderados en dicha oportunidad por el Instructor, en cuanto la defensa ha manifestado que se ha cumplimentado el pago total del plan oportunamente suscripto respecto de la deuda que diera origen a las actuaciones, lo cual se condice con lo informado a pedido de la Suscripta por la Administración Federal de Ingresos Públicos a fs. 93/vta.

Así, a los fines de garantizar el derecho a la doble instancia judicial, no resulta pertinente que esta Alzada emita pronunciamiento sobre el efectivo cumplimiento y los alcances que cabe otorgarle al invocado **pago total del plan de pagos suscripto** oportunamente.

Por lo expuesto, corresponde **CONFIRMAR** la resolución dictada con fecha 27.08.2020 por el Juez Federal de Villa María, en cuanto dispuso **SUSPENDER** el trámite de las presentes actuaciones seguidas en contra de **Orlando José Eula** (CUIT 23-06603800-9), debiendo el Juez instructor **expedirse** sobre el efectivo cumplimiento y alcances que corresponde otorgar al invocado **pago total del plan de pagos suscripto** oportunamente. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN). Así voto.-

**El señor Juez de Cámara, Dr. Eduardo Ávalos, dijo:**

**I. Coincido con las consideraciones efectuadas**

**por la señora Juez del primer voto doctora Graciela**

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 36047/2019/CA1

Montesi, en lo concerniente a que no corresponde la aplicación del art. 16 del régimen penal tributario previsto por el art. 279 de la Ley 27.430, toda vez que de las constancias de la causa no surge cancelación total e incondicionada de la deuda tributaria relacionada con los hechos ilícitos aquí investigados, dentro del plazo y condiciones previstos legalmente.

**II.** En este sentido, cabe recordar que en el precedente jurisprudencial citado, el Máximo Tribunal hizo suyos los argumentos del dictamen de fecha 5 de febrero de 2004 del Procurador General de la Nación que, en lo que aquí interesa, primero sostuvo *"Pienso, por consiguiente, que interpretar que también el párrafo segundo del artículo 73 requiere que el contribuyente se haya presentado espontáneamente a regularizar su deuda en los términos del artículo 113 de la ley 11.683 no sólo sería un contrasentido, sino que importaría además desvirtuar y tornar inoperante la norma. Y es que si el contribuyente pudiera acreditar la espontaneidad de su presentación, en el sentido del artículo 113 citado, lo normal será que se presente a regularizar su situación fiscal en el marco del propio régimen de presentación espontánea que prevé esa norma de la ley 11.683, más favorable para él en tanto conlleva la exención de intereses, multas y sanciones. Pero si esto es así, entonces siempre sería aplicable, por regla general, el párrafo primero del artículo 73; el párrafo segundo de ese precepto, por el contrario, prácticamente no tendría aplicación alguna"*.

Posteriormente, en otro pasajes del dictamen se expuso que *"...pues considero que si la ley le ofrece al contribuyente la posibilidad de poner fin a la acción y evitar la imposición de la pena abonando la totalidad de la deuda y, a la vez, admite la posibilidad de que ello*

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747

tenga lugar en el marco de un régimen de facilidades de pago (segundo párrafo), no parece lógico que el proceso penal pueda proseguir hasta el dictado de una sentencia definitiva, eventualmente condenatoria, mientras el contribuyente se halla cumpliendo las cuotas del plan de pago previamente acordado. Por el contrario, en mi opinión, la previsión por parte del legislador de un plazo para el cumplimiento de las obligaciones que es condición para la extinción de la acción importa, implícitamente, una suspensión ministerio legis del trámite del proceso y de la prescripción de la acción (Fallos: 325:1731 y causa R 962, L. XXXVI, "Rivera Gorbal, Jorge y otros s/arts. 864, 866, 871, 876, 1112, 876, 882 y 638 del Código Aduanero, sentencia del 13 de septiembre de 2002), hasta tanto el contribuyente cumpla satisfactoriamente con la totalidad de los pagos estipulados en el régimen de regularización, en cuyo caso deberá desistirse de la pretensión punitiva, o se produzca la caducidad del plan de facilidades de pago por incumplimiento (cf. artículos 12 y ss. del decreto 1384/01), en cuyo caso deberá reiniciarse el ejercicio de la acción penal pública" (Dictamen del Procurador General de la Nación, del 5 de febrero de 2004 en "B. 766. XXXIX. RECURSO DE HECHO Bakchellián, Fabián y otros s/ infracción ley 24.769 Causa N° 3977C").

Es decir, el precedente jurisprudencial citado hacía referencia a una situación en la que el contribuyente había suscripto un plan de facilidades de pago en el marco de una normativa legal -art. 73 de la ley 25.401- que contemplaba la posibilidad de liberación de la acción penal; pero que por vía reglamentaria, y de la interpretación que cabía efectuar al término

~~"espontaneidad"~~

~~-en virtud del art. 38 del Decreto~~

Fecha de firma: 08/01/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 36047/2019/CA1

1387/2001 del PEN-, se privaba virtualmente de acceder a dichos beneficios a los contribuyentes que se encontraban en circunstancias distintas a las previstas por el art. 113 de la Ley 11.683.

Ello, motivó el pronunciamiento del máximo Tribunal en términos señalados en los párrafos citados precedentemente.

En orden a esta cuestión, debe señalarse que esta modalidad legislativa como la prevista por el art. 73 de la Ley 25.401 -a la que refiere el precedente jurisprudencial citado por el Juez de la causa y que, en garantía de la división de los poderes, no corresponde asumir ningún juicio de valor- ha sido una herramienta jurídica cada vez más habitual. Muestra de ello son las leyes 26.476, 26.860, 27.260 y 27.541 -y su mod. dispuesta por ley 27.562-, entre otras- que han tenido redacción y finalidad similar.

Consecuentemente y teniendo en cuenta estos lineamientos conceptuales, deben diferenciarse los supuestos que se encuentran enmarcados dentro de previsiones normativas que contemplan expresamente beneficios de liberación de acción penal -puesto que emanan de leyes del Congreso de la Nación-; de aquellos otros casos en donde los contribuyentes suscriben planes de pagos en el marco de disposiciones de AFIP-DGI y que son de jerarquía normativa inferior, toda vez que se ejercen en uso de las facultades conferidas por el art. 32 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y el artículo 7° del Decreto N° 618/1997, sus modificatorios y sus complementarios.

En base a lo aquí sentado, en el segundo supuesto este tipo de financiación de pagos de deudas tributarias

~~se tratan de medidas dispuestas directamente por el~~

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747

Organismo Fiscal, tendientes a promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y responsables, cuya naturaleza jurídica no resulta equiparable -en cuanto sus efectos jurídicos penales- a los regímenes de moratoria fiscal que contemplan supuestos de liberación de la acción penal en curso, para los contribuyentes que procedan a la cancelación de deudas tributarias como puede ser el caso del referido art. 73 de la Ley 25.40, o por ejemplo las demás leyes mencionadas como ser los regímenes previstos por las leyes 26.476, 26.860, 27.260 y 27.541 y ley 27.562, entre otras.

**III.** Trasladados estos conceptos al caso de autos, se advierte que el plan de facilidades de pagos efectuado por Orlando José Eula, no fue suscripto en el marco de ninguna ley de moratoria que contemple el beneficio de extinción de la acción penal a la que alude la jurisprudencia de la CSJN en autos "Bakchellian".

Asimismo, en autos tampoco se verifica que el referido plan de facilidades de pagos haya sido efectuado en el marco de las leyes de regularización de deudas tributarias previstas por la Ley 27.541 (B0 21.12.2019) -y su modificación dispuesta por Ley N° 27.652 (B0 26.8.2020)-, ni que haya sido reformulado en los términos de las leyes mencionadas, que entraron en vigor con fecha posterior a la suscripción del referido plan de pagos.

Efectivamente, el plan de facilidades de pago en cuestión fue suscripto ante AFIP-DGI, por un total de veinticuatro (24) cuotas, cuya fecha de consolidación fue del 11.03.2019 y su registración quedó nominada bajo el número "L448874" (ver fs. 60).

Ahora bien, de la presentación efectuada ante este Tribunal con fecha 12.5.2021, se desprende que el

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 36047/2019/CA1

imputado Orlando José Eula habría dado cumplimiento total al referido plan -por un monto total de \$8.227.007,76- cuya fecha de cancelación de la última cuota fue del 16.3.2021.

Es decir que luego de la fecha de suscripción del plan de pagos efectuada por el nombrado ante AFIP-DGI, se sancionó la Ley 27.541 -que fue modificada por Ley 27.562- de moratoria fiscal que contempla para sus adherentes la posibilidad de acceder al beneficio de extinción de la acción penal en caso de cancelación total sus obligaciones tributarias.

Así, la Ley 27.451 denominada "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública" fue dictada como consecuencia de la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal (entre otras), para lo cual se delegó en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades previstas por el art. 76 de la CN, hasta el 31 de diciembre de 2020.

En efecto, allí se dispuso, entre otras cuestiones: "...c) Promover la reactivación productiva, poniendo el acento en la generación de incentivos focalizados y en la implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro, pequeñas y medianas empresas...".

De acuerdo a lo normado por la Ley 27.541 -modificada por Ley 27.562- en su art. 8, se dispuso que "Los contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, podrán ~~acogerse, por las obligaciones vencidas al 31 de julio de~~

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747

2020 inclusive o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el presente capítulo...".

También, se estableció que "Para la adhesión al presente régimen no podrán establecerse condiciones adicionales a las explícitamente estipuladas en la presente ley. Se podrá incluir en este régimen la refinanciación de planes de pago vigentes y las deudas emergentes de planes caducos. (...) El acogimiento previsto en el presente artículo podrá formularse entre la fecha de entrada en vigencia de la normativa complementaria que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y el 31 de octubre de 2020, inclusive".

Además, el art. 10 ordenó que "El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras, los coautores o las coautoras y los partícipes o las partícipes del presunto delito vinculado a las obligaciones respectivas, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando esta no tuviere sentencia firme. La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, por compensación, de contado o mediante plan de facilidades de pago producirá la extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto producirá respecto de aquellas obligaciones de idéntica naturaleza a las mencionadas, que ~~hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en~~

Fecha de firma: 08/09/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 36047/2019/CA1

*vigencia de la presente ley modificatoria, incluidas, en este supuesto, las inherentes al Régimen Nacional de Obras Sociales".*

En relación con este último punto, se advierte que aunque la fecha de cancelación total de la deuda del encartado Orlando José Eula (3 de marzo de 2021), fue posterior por unos escasos meses a la fecha límite que estipula el art. 10 de la Ley 27.562 (26 de agosto de 2020), me pregunto si resulta aplicable al caso de autos, la aplicación retroactiva como ley penal más benigna, las disposiciones legales prevista la Ley 27.541 -y su modificación por Ley 27.562.

También, cabe preguntarse qué sucede si como en el caso de autos, durante la vigencia de un plan de pagos común suscripto ante el Organismo Fiscal, se dicta una ley de moratoria que contempla, como se dijo, la extinción de la acción penal tributaria -en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación- y en la que además, se extienden sus efectos jurídicos respecto de aquellas obligaciones de idéntica naturaleza a las mencionadas, pero cuyo tope temporal es que hayan sido canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 10 de dicha norma.

**IV.** En tal sentido, sabido es que de conformidad al art. 18 de la Constitución Nacional, la ley penal no puede ser aplicada retroactivamente, ya que ello implicaría violar la garantía constitucional allí contenida de que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". Es decir, que -como regla- la ley penal es irretroactiva y rige para el futuro.

Al respecto, el art. 2 del Código Penal,

~~resuelve este dilema normativo cuando que establece una~~

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747

excepción a la regla general de irretroactividad, al disponer que: "si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse el fallo en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna".

De esta forma, el Código Penal, autoriza la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, siendo esta una garantía legal cuya aplicación procede de pleno derecho.

En este supuesto, según Núñez el término "ley" utilizado por la norma de fondo alcanza a la totalidad del *"ordenamiento jurídico que dentro de un cuerpo legal y sus preceptos complementarios, regula la imputación penal y sus consecuencias en un caso concreto. Por ello, cualquier anulación, modificación o alteración de relaciones jurídicas producto de reformas operadas en campo extrapenal, pero con decisiva injerencia en el marco de la materia de prohibición, debe ser tomada en cuenta a la luz de este principio de mayor benignidad de la ley"* (Aboso, Gustavo Eduardo. Código penal de la República Argentina. Ed. B de F, Buenos Aires, año 2014, pág. 13).

Asimismo, por ley penal más benigna se entiende aquel precepto legal que en concreto deje al autor, desde un punto de vista jurídico material, en mejor situación. Esto comprende las disposiciones penales materiales que determinan la responsabilidad y la medida de la pena (Donna, Edgardo Alberto. Derecho penal. Parte General. Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2019, pág. 302).

A su vez, a partir de la reforma constitucional de 1994, la retroactividad de la ley penal más benigna encuentra fundamento en los tratados internacionales incorporados con idéntica jerarquía (art. 75 inc. 22 de la C.N.). Concretamente, el art. 9 de la Convención Americana

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 36047/2019/CA1

de derechos Humanos establece en el particular que *"Nadie puede ser condenado por acciones y omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello"*.

En orden a todo lo expuesto, sin soslayar la naturaleza temporal y excepcional de este tipo de normas, no parece ajustado a derecho privar de los beneficios allí dispuestos y relacionados con la extinción de la acción penal, a quien canceló en forma total sus obligaciones tributarias, por haberse excedido en forma exigua -seis (6) meses- de después.

En este punto, asume un carácter superlativo que las normas penales en juego, esto es las leyes 27.541 y 27.652, establecen consecuencias jurídicas penales de orden sustancial y desincriminatorias -y, consecuentemente más benignas- cuando prevén la liberación de las acciones penales, en consonancia con lo previsto por los arts. 59 inc. 2) y 62 del CP, por lo que sin dudas dichos regímenes constituyen normas más favorables para resolver la situación procesal del imputado en autos.

Por ello, dentro del ámbito de conocimiento del Juez penal, las normas deben valorarse de acuerdo los principios que inspiran el sistema penal, promoviendo una interpretación *pro homine* de los hechos y derecho aplicable, que ante la duda se decida en el sentido más garantizador del derecho que se trate (art. 75 inc. 22, art. 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros).

---

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747

Por último, corresponde señalar que no pueden perderse de vista los modernos principios que imponen el sistema acusatorio y adversarial, cuya puesta en marcha depende del cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (art. 2 de la Ley N° 27.150 y su modif. sustituida por el art. 66 de la Ley N° 27.482).

De tal forma, debe ponderarse la vigencia del art. 22 del Código Procesal Penal Federal, en cuanto dispone que *"Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social"* (el destacado es mío).

En atención a ello, también debe destacarse que los institutos previstos por la nueva legislación procesal, en la medida en que no resultan incompatibles con el sistema procesal todavía vigente previsto en la Ley N° 23.984, permiten un mayor goce de las garantías constitucionales para todos los justiciables de manera uniforme en todo el territorio nacional y, concomitantemente, se encaminan para gestionar la carga del trabajo de forma más efectiva y orientar mayores esfuerzos de investigación a los casos complejos (Resolución 2/2019 de la Comisión Bilateral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Penal Federal).

En suma, en función de lo dispuesto por el art. 2, 59 inc. 2) y 62 del CP, considero ajustado a derecho la aplicación retroactiva de la Ley 27.541 -modificada por Ley 27.562-, cuya ponderación debe armonizarse con los principios constitucionales previstos por el art. 75 inc.

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A  
FCB 36047/2019/CA1

22 de la CN, el art. 9 de la CADH y su armonización con el principio previsto por el art. 22 del CPPF.

En consecuencia, corresponde confirmar la resolución dictada por el Juez Federal de Villa María en cuando dispuso la suspensión de la acción penal que se sigue en los presentes obrados contra del encartado Orlando José Eula por la presunta comisión del delito de evasión de tributos que contempla el art. 1 del régimen penal tributario previsto por el art. 279 de la Ley 27.430.

Asimismo, una vez recepcionadas las presentes actuaciones por parte del Juez interviniente, deberá verificarse el cumplimiento de los demás requisitos que exige la Ley 27.541 -modificada por Ley 27.562-, a los fines declarar eventualmente la extinción de la acción penal en los términos del art. 10, segundo párrafo, de la ley citada (art. 22 del CPPF, arts. 2, 59 inc. 2), 62 del CP, art. 75 inc. 22 y art. 9 de la CADH). Sin Costas (art. 530 y 531 del CPPN). Así voto.

**El señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes, dijo:**

Comparto las consideraciones expuestas por el señor Juez de Cámara preopinante y, en consecuencia, me expido en idéntico sentido. Así voto.-

Por todo lo expuesto;

### **SE RESUELVE:**

**I.- CONFIRMAR** la resolución dictada con fecha 27 de agosto de 2020 por el Juez Federal de Villa María, en cuanto dispuso **SUSPENDER** el trámite de las presentes actuaciones seguidas en contra de **Orlando José Eula** (CUIT 23-06603800-9), debiendo el Juez instructor **expedirse** sobre el efectivo cumplimiento y alcances que corresponde

Fecha de firma: 08/03/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34037386#287608213#20220308091107747

otorgar al invocado **pago total del plan de pagos suscripto** oportunamente.

**II.-** Sin costas (art. 530 y 531 del CPPN.).

**III.-** Regístrese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.

GRACIELA S. MONTESI  
JUEZ DE CÁMARA

EDUARDO AVALOS  
JUEZ DE CÁMARA

IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES  
JUEZ DE CÁMARA

CELINA LAJE  
Secretaria de Cámara

---

*Fecha de firma: 08/03/2022*

*Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA*

*Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara*



#34037386#287608213#20220308091107747